



Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Distr. limitada
25 de agosto de 2011
Español
Original: inglés

Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierto sobre recuperación de activos

Quinta Reunión

Viena, 25 y 26 de agosto de 2011

Proyecto de informe

Adición

III. Aplicación de la resolución 3/3 de la Conferencia y de las recomendaciones del Grupo de trabajo

1. El Presidente dio comienzo al examen del tema 2 del programa. Un representante de la Secretaría presentó el documento CAC/COSP/WG.2/2011/2, relativo a la situación de la aplicación de las recomendaciones del Grupo de trabajo sobre recuperación de activos y de la Conferencia de los Estados Parte, resaltando los progresos realizados y las principales novedades. En la esfera de la acumulación de conocimientos, destacó la importancia de los instrumentos y recursos de fomento del conocimiento para combatir la corrupción (TRACK) y de la Biblioteca Jurídica de la UNODC, que eran instrumentos basados en la web y reunían, sistematizaban y difundían conocimientos jurídicos sobre la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos, y se explayó con respecto a las publicaciones de la Iniciativa StAR, su proceso de elaboración y su divulgación. También hizo referencia a los esfuerzos de la UNODC por aplicar las recomendaciones del Grupo de trabajo relativas a la recopilación analítica de casos de recuperación de activos y al estudio sobre la viabilidad de preparar normas jurídicas modelo en materia de recuperación de activos.

2. Con respecto a las recomendaciones relativas al fomento de la confianza, el representante de la Secretaría se refirió a la base de datos sobre los coordinadores de la recuperación de activos elaborada por la Secretaría y a la recopilación de una lista exhaustiva de autoridades centrales encargadas de la prestación de asistencia judicial recíproca designadas por los Estados parte. El representante mencionó los esfuerzos de la UNODC con miras a lograr la participación del sector privado y su compromiso en la lucha contra la corrupción. En lo que respecta a la asistencia técnica, la capacitación y la creación de capacidad, el representante hizo notar las formas de asistencia técnica y capacitación proporcionadas por la secretaría y la



Iniciativa StAR. También hizo referencia al nuevo enfoque de las actividades de capacitación que adoptaría la Iniciativa StAR en el futuro, en el que se daría prioridad a las necesidades de asistencia técnica en relación con casos concretos de recuperación de activos.

3. En el debate que tuvo lugar a continuación, los oradores atribuyeron gran importancia e interés al desarrollo de los conocimientos jurídicos y productos conexos y destacaron su positivo impacto en la creación de un acervo jurídico común para los profesionales. Los oradores acogieron con beneplácito la participación de una amplia gama de expertos de diferentes ordenamientos jurídicos en la preparación de productos de conocimiento, y destacaron la importancia de garantizar el mantenimiento de esa práctica en el futuro. El orador sugirió además que se consultara al Grupo de trabajo en relación con la planificación y la investigación realizadas en el marco de la preparación de futuros productos de conocimiento.

4. Los oradores expresaron gran interés y apoyo en lo que respecta al estudio analítico de casos de recuperación de activos previsto y observaron que ese estudio debería incluir también datos sobre los intentos por recuperar el producto de la corrupción que no hubieran tenido éxito y los problemas que se hubieran planteado en la aplicación de los marcos de recuperación de activos y asistencia judicial recíproca, en particular el capítulo V de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

5. Con respecto a la elaboración de normas jurídicas modelo, los oradores destacaron la necesidad de tener en cuenta la diversidad de ordenamientos jurídicos de los Estados que podrían llegar a utilizar un instrumento de esa índole.

6. Varios oradores recalcaron la importancia del fomento de la confianza entre los Estados que solicitaran la recuperación de activos y los Estados requeridos, como había ocurrido en anteriores deliberaciones del Grupo de trabajo. Algunos acontecimientos recientes que habían dado lugar a un aumento de las solicitudes de recuperación de activos relacionadas con casos de corrupción habían puesto de relieve esta cuestión, y algunos oradores expresaron decepción ante el grado relativamente bajo de cooperación que habían recibido. La voluntad política no siempre iba acompañada de las acciones correspondientes y, en algunos casos, las solicitudes habían sido denegadas sin más. En ese contexto, se expresó la opinión de que el progreso en la aplicación de las disposiciones sobre recuperación de activos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción era limitado, principalmente debido a la falta de confianza entre los Estados. Los oradores destacaron que la renuencia a cooperar y a responder a las solicitudes de recuperación de activos no se correspondía con el compromiso asumido por los Estados cuando acordaron el texto de la Convención contra la Corrupción.

7. Algunos oradores resaltaron la importancia de lograr la participación del sector privado, y en particular de las instituciones financieras, en los esfuerzos globales por reforzar la cooperación y lograr una recuperación efectiva de activos, y acogieron con beneplácito los esfuerzos de la Secretaría en pos de ese objetivo.

8. Varios oradores acogieron con beneplácito el establecimiento de una base de datos sobre coordinadores de la recuperación de activos y autoridades centrales en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción como medio de alentar y reforzar la comunicación directa entre los funcionarios de los

Estados requirentes y los Estados requeridos. Los contactos oficiosos con las contrapartes anteriores a la presentación de solicitudes oficiales se consideraron como un elemento crucial para el éxito de la cooperación en materia de recuperación de activos.

9. La labor de la Iniciativa StAR se consideró muy valiosa. Más específicamente, un orador encomió la labor realizada por la Iniciativa StAR y su contribución al progreso del programa de recuperación de activos. Otro orador destacó que la asistencia técnica prestada en el marco de la Iniciativa StAR era muy beneficiosa tanto para mejorar las aptitudes como para el intercambio de experiencias. Dicho esto, los oradores destacaron no obstante la importancia de diversificar las actividades en pos del objetivo de promover la plena aplicación del capítulo V de la Convención, especialmente teniendo en cuenta la complejidad de ese capítulo y la necesidad de contar con instrumentos adicionales en previsión del examen de su aplicación. Se resaltó la importancia de garantizar respuestas a las solicitudes de asistencia técnica.

10. El Secretario de la Conferencia de los Estados Parte destacó la importancia y los resultados positivos de la asociación entre el Banco Mundial y la UNODC en el marco de la Iniciativa StAR. Observó además que esta asociación se había desarrollado en respuesta a los mandatos dimanantes de la Convención y de la Conferencia de los Estados Parte y en estricto cumplimiento de esos mandatos, y que permitía una acción eficiente, una utilización óptima de recursos limitados y un máximo aprovechamiento de los conocimientos especializados.

11. Una representante de la Iniciativa StAR presentó un panorama general de las conclusiones preliminares del estudio sobre el enriquecimiento ilícito. Indicó que de las investigaciones se desprendía que algo más de 40 países habían promulgado disposiciones sobre enriquecimiento ilícito, y que era menor aún el número de países que habían entablado acciones contra ese delito. Se había determinado además que los países carecían a menudo de los conocimientos especializados y los recursos para investigar y enjuiciar los casos de enriquecimiento ilícito. El estudio había llegado a la conclusión de que todos los países abordaban la recuperación de activos en sus disposiciones sobre enriquecimiento ilícito, y se habían producido decomisos una vez dictadas las sentencias. Las conclusiones preliminares del estudio indicaban que el proceso no violaba el debido proceso legal ni los derechos humanos y que la cuestión debía evaluarse en su conjunto, teniendo también en cuenta el sistema de justicia penal del país de que se tratara. El estudio se había distribuido al Grupo con la solicitud de que se aportaran observaciones y sugerencias antes del 30 de septiembre de 2011.

12. Un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) subrayó el impacto negativo de la corrupción, incluido el enriquecimiento ilícito, en los derechos humanos. Recordó que en la resolución 7/11 del Consejo de Derechos Humanos se había encomendado a la Oficina el mandato de ampliar su labor a este respecto, e indicó que la Oficina estaba en vías de preparar estudios que abordaban el impacto negativo de la corrupción en los derechos humanos. Reconociendo la contribución de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al estudio de la Iniciativa StAR sobre el enriquecimiento ilícito, reiteró la buena disposición de la Oficina para prestar asistencia a los países, en cooperación con la UNODC, el Banco Mundial y la Iniciativa StAR. Durante el debate sobre esta

cuestión, un orador propuso que, dado el efecto perjudicial de la corrupción desde el punto de vista de los derechos humanos, podría preverse la creación de un tribunal internacional contra la corrupción.

13. Los oradores acogieron con beneplácito la realización del estudio sobre el enriquecimiento ilícito por parte de la Iniciativa StAR, conforme a lo indicado por el Grupo de trabajo. Varios oradores destacaron que sus países habían adoptado medidas jurídicas y de otra índole para permitir la penalización del enriquecimiento ilícito y el decomiso de los activos pertinentes y para aumentar la cooperación internacional a ese respecto. Se sugirió que la comparación entre las declaraciones de bienes de funcionarios públicos de alta jerarquía y sus ingresos reales podría permitir que los países decomisaron los activos ilícitos. Varios oradores subrayaron que el hecho de permitir el decomiso de activos sin que mediara sentencia resolvería, en algunos casos, varias cuestiones dimanantes del proceso.

14. Dos oradores informaron acerca de la legislación sobre enriquecimiento ilícito promulgada en sus Estados y solicitaron que quedara reflejada en el estudio. Una delegación resaltó que el delito de enriquecimiento ilícito tipificado en su país se sancionaba con multa.